
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 1 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

AUTO No. 005 DE 2026

“Por medio del cual se evalúa el mérito de las pruebas recaudadas, se dispone la terminación de la investigación y se archiva un proceso”

(Artículo 90 Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 38 de la Ley 2094 de 2021)



Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

AUTO TERMINACIÓN Y ARCHIVO	
RADICACIÓN	IDPC 035 - 2023
INVESTIGADO(A)	MARIA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ
CARGO	Subdirector Técnico Código 068 Grado 01 Subdirección de Protección e intervención del Patrimonio
FECHA DE LA QUEJA O INFORME	17 DE ENERO DE 2022
FECHA DE HECHOS	VIGENCIA 2021
HECHOS	<i>Presunto incumplimiento de los controles y/o acciones de mitigación por parte del proceso Protección e Intervención del Patrimonio, así como la materialización del riesgo 11, conforme el Informe de Riesgos gestión y corrupción III cuatrimestre de la vigencia 2021.</i>
QUEJOSO	DE OFICIO – INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO

El Jefe de la oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en ejercicio de sus funciones y en uso de las facultades legales, establecidas en la Ley 1952 de 2019 modificada por ley 2094 de 2021, y en especial las establecidas en el acuerdo 001 del 10 de enero de 2023, emanada por la Junta Directiva de la Institución, procede a decidir el mérito de la indagación previa radicada bajo el número **035-2023**.

HECHOS

Mediante radicado número 20221200007673 del 17 de enero de 2022, la Asesora de Control Interno el día 17 de enero de 2022 dio traslado por ORFEO a la Dirección General

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 2 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

Informe de Seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción – Tercer Cuatrimestre de 2021, señalando que:

“Seguimiento Riesgos gestión y corrupción III cuatrimestre de 2021.”

Así mismo, el Director General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural PATRICK MORALES THOMAS, remite el día 18 de enero de 2022 vía ORFEO, el radicado número 20221200007673 del 17 de enero de 2022, al encargado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, para su revisión y posterior trámite:

La oficina de Control disciplinario Interno observa que en el informe indica no conformidades siendo 1 de ellas para el proceso Protección e Intervención del Patrimonio, por la materialización del riesgo 11 conforme se especifica en el siguiente cuadro:



“

*4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS * Incumplimiento o cumplimiento parcial de controles y/o acciones de mitigación:*

(...)

Materialización de riesgos

<i>Proceso</i>	<i>Riesgo</i>	<i>Tipo Riesgo</i>	<i>Descripción Riesgo</i>	<i>Observación Control Interno</i>
<i>Protección e Intervención del Patrimonio</i>	<i>11</i>	<i>Gestión</i>	<i>Posibilidad de afectación reputacional por responder de manera inoportuna las solicitudes que se reciben, debido a deficiencias en los procedimientos .</i>	<i>Se evidencia la materialización del riesgo, ya que existen respuestas entregadas fuera de los términos establecidos, como se observa en informe de auditoría al proceso realizado por la Asesoría de</i>

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 3 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

				<i>Control Interno.</i>
--	--	--	--	-------------------------

(...)

ANTECEDENTES PROCESALES

Mediante Auto No. 035 del 28 de abril de 2023, Control Disciplinario Interno del IDPC, abrió indagación previa en averiguación conforme a lo establecido en el Artículo 208 de la ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 34 de la Ley 2094 de 2021, respecto del *“Presunto incumplimiento de los controles y/o acciones de mitigación por parte del proceso Protección e Intervención del Patrimonio, así como la materialización del riesgo 11, conforme el Informe de Riesgos gestión y corrupción III cuatrimestre de la vigencia 2021..”* (Folio 1 a 3).

Mediante Auto No. 030 del 27 de octubre de 2023, Control Disciplinario Interno del IDPC ordenó la práctica de pruebas dentro de la indagación previa (Folios 15 a 18).

Memorando 20235200181353 del 26 de diciembre de 2023 de la Subdirectora de Gestión Corporativa, en la que remite Certificación relacionada con la hoja de vida de la funcionaria Dra. María Claudia Vargas Martínez.

Mediante Auto No. 006 del 25 de marzo de 2025, Control Disciplinario Interno del IDPC ordenó la apertura de investigación disciplinaria (Folios 27 a 32).



Mediante Auto No. 023 del 14 de julio de 2025, Control Disciplinario Interno del IDPC ordenó la práctica de pruebas dentro de una investigación disciplinaria y se toman otras determinaciones (Folios 56 al 58).

PRUEBAS ALLEGADAS, DECRETADAS Y PRACTICADAS

Que en atención a las pruebas decretadas y en respuesta a las solicitudes realizadas se llegaron al expediente disciplinario los siguientes documentos:

1. Memorando 20231200066493 del 08 de mayo de 2023 de la Asesora de Control Interno (Folio 06), donde se informa:

Documento en el que informe área y funcionario encargado para el año 2021 de la materialización del riesgo 11 del proceso Protección e Intervención del Patrimonio, conforme al informe de Seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción – Tercer Cuatrimestre de 2021 realizado.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 4 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

Respuesta: De acuerdo con el seguimiento, se evidencia que el responsable es el Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio, cargo que era ocupado a la fecha de corte del seguimiento por María Claudia Vargas Martínez.

2. Memorando 20232200153093 del 20 de noviembre de 2023 de la Asesora de Planeación (Folio 21).
3. Memorando 20251200063623 del 30 de abril de 2025, de la Asesora de Control Interno (Folio 34 al 50), donde se informa: los radicados de los presuntos incumplimientos, la no afectación a la entidad y tercero; los planes de mejoramiento que se elaboraron y ejecutaron, la subsanación de los incumplimientos, entre otros.
4. Resolución No. 000271 de 21 de junio de 2021, expedida por el Director General del IDPC., en el que se resuelve una solicitud de intervención para el predio ubicado en la calle 11 No. 3-08 Este, localizado en la UPZ 94 La Candelaria en el sector de interés cultural - Antiguo de la ciudad de Bogotá (folios 71 a 79).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto de Patrimonio Cultural es competente para conocer y decidir la presente investigación disciplinaria, conforme al inciso 5 del artículo 2 del Código General Disciplinario, *“corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias”*.



De igual forma, en el artículo 7 del Acuerdo 001 de enero de 2023, Oficina de Control Disciplinario Interno.

“Las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPC, son las siguientes.

1. *Adelantar la etapa de instrucción hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo de los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la entidad u organismo, de conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia.”*

(...)

Surtida la etapa de apertura de investigación disciplinaria, compete a esta Oficina, en virtud del artículo 213 de la Ley 1952 de 2019, con reforma introducida por la Ley 2094 de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	<p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	
	<p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>	
	<p>AUTO</p>	<p>Fecha: 21-04-2026</p> <p>Pág. 5 de 13</p>

2021, determinar, al vencerse el término de investigación si procede el archivo definitivo, o la notificación de la formulación del pliego de cargos.

Planteado el hecho que originó la actuación disciplinaria, debe esta instancia determinar, si los hechos objeto del informe en efecto ocurrieron, y si de ellos se observa responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

Es por ello que se hace necesario recordar, que tal como lo prevé el Código General Disciplinario, constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión de cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, o si están amparados por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 31 de dicho ordenamiento.



ASUNTO POR TRATAR

Análisis de posible falta disciplinaria por materialización del Riesgo R11 del proceso de Protección de Intervención del Patrimonio: “Presunto incumplimiento de 1 acción del riesgo de Gestión por posibilidad de afectación reputacional por responder de manera inoportuna las solicitudes que se reciben (las respuestas fueron entregadas fuera de los términos establecidos), conforme se observa en el informe de Riesgos de Gestión y corrupción III cuatrimestre de la vigencia 2021”, **según Oficio N.º 20221200007673 del 17 de enero de 2022** – III cuatrimestre de la vigencia 2021.

En tal sentido, entraremos a evaluar si existe conducta violatoria de deberes y prohibiciones por acción o por omisión de lo cual se procederá a la apertura de investigación disciplinaria o contrario sensu, este Despacho procederá a la aplicación del artículo 90 de la ley 1952 de 2019.

El Auto de apertura de investigación disciplinaria N° 006 del 25 de marzo de 2025, estableció que los hechos presuntamente irregulares que se relacionan con una presunta falta disciplinaria de acuerdo a lo señalado en el Informe Seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción – Tercer Cuatrimestre de 2021, radicado N.º **20221200007673 del 17 de enero de 2022**, en el cual se establece expresamente con la materialización del riesgo de gestión respuestas entregadas fuera de los términos.

En tal sentido, entraremos a evaluar si existe conducta violatoria de deberes y prohibiciones por acción o por omisión de lo cual se procederá al archivo de la



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	<p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	
	<p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>	
	<p>AUTO</p>	<p>Radicado: 20265300082423</p> <p>Fecha: 21-04-2026</p> <p>Pág. 6 de 13</p>

investigación disciplinaria o contrario sensu continúa con la apertura de un pliego de cargos. Además, el objeto de la investigación disciplinaria es buscar los medios de convicción que soporten la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable, es así, como de debe traerse a colación que en el artículo 212 de la Ley 1952 de 2019, la investigación tiene como fines: ***i) verificar la ocurrencia de la conducta; ii) determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; o iii) si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.***

Con base en lo anterior, se recaudó material probatorio relevante, especialmente el allegado por la Oficina de Control Interno mediante el N.º Memorando 20231200066493 de 8 de mayo de 2023, 2025120003623 y 20251200114493 del 06 de agosto de 2025, quien manifestó en el i) primer memorando que, la persona a cargo del trámite, en el ii) segundo memorando manifiesta que: no recibió respuesta por Parte de la Subdirección e Intervención sobre la no conformidad por incumplimiento a los términos de derechos de petición, que no tiene conocimiento sobre una afectación contra la entidad, funcionario o tercero, que se realizó un plan de mejoramiento en la que establecieron las políticas de operación 5.4 y 5.3; relacionado con acciones tomadas por la materialización del riesgo las acciones PI 109, la cual en el año 2023, se cerró y se calificó como efectiva, en razón a que los controles de mitigación fueron cumplidos, a los planes de mejoramiento del tercer cuatrimestre de 2021, y PI 191, este se califica como cerrada e inefectiva en razón a que se identificaron demoras en trámites de quejas y reclamos en el periodo comprendido de junio a diciembre 2022; informa que las peticiones deben contestarse en un término de sesenta y cinco (65) días hábiles, y que las peticiones contestadas fuera de término son: 20205110054592 y 20205110054422.

Posterior a la respuesta dada por Control Interno, mediante auto de 023 de catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025), por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de una investigación disciplinaria y se toman otras determinaciones" en la que se ordena incorporar los radicados 20205110054592 de fecha 18/09/2020 y 20205110054422 de fecha 17/09/2020, sus respuestas y el historial de ORFEO.

Ahora bien, en lo que concierne a los hallazgos administrativos por la materialización del riesgo, consistente en las respuestas tardías, es necesario analizar si las conductas que generaron la materialización del riesgo, reúnen los requisitos necesarios para que se configure una conducta disciplinable, que para el caso concreto consistía en la no respuesta oportuna de las peticiones y, si esta situación podría ser atribuida a la investigada, en este punto se menciona que, a pesar de la generación de un plan de mejora, la creación del mismo no implica necesariamente la corrección o eliminación de la comisión de una conducta disciplinable, ni de la causa raíz que haya generado la materialización del riesgo, motivo por el cual se analizó la respuesta 20251200114493 del 06 de agosto de 2025 de la Oficina de Control Interno, en la que informa la peticiones

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 7 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

resultas fuera de término. Además, dentro del plenario no aparece afectación a la entidad o terceros por estos radicados.

Al revisar los requisitos de responsabilidad disciplinaria, el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "A" Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17) estipula que:

"...surge la responsabilidad disciplinaria cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de cinco categorías a saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad. A su vez, las cinco categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a partir de tres juicios diferentes: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad.



*...relativo a la valoración sobre la ilicitud sustancial. Esta (...) se configura cuando la conducta tipificada como falta afecte el deber funcional sin justificación alguna. [...] [P]ara que se configure una infracción disciplinaria no es **necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al Estado**, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes funcionales encargados al servidor público, **que afecten los valores o principios de la función pública.** [...]*

Quiere decir que: conforme la documental aportada que el IDPC actuó de acuerdo a los principios de transparencia, eficacia y calidad de la información.

La ley 1712 de 2014 en su artículo 3 define la transparencia de la siguiente manera:

*"...Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de **proporcionar y facilitar** el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley."*

Se verifican en las pruebas obrantes en el expediente las respuestas remitidas al correo: proyctoseic1@gmail.com y proyectos.ingcfg@gmail.com con No. radicado 20205110054422 de 17 de septiembre de 2020, en el que la entidad da respuesta a la solicitud 20213060018111 de fecha 09 de abril de 2021, respuesta emitida a GERMAN

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 8 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

GARZÓN SALCEDO, y con No. Resolución 271 de 21 de junio de 2021 “Por la cual se resuelve una solicitud de intervención para el predio ubicado en la Calle 11 No. 3-08 Este, localizado en la UPZ 94 La Candelaria en el Sector de Interés Cultural – Antiguo- de la ciudad de Bogotá D.C”, la entidad da respuesta a la solicitud 20205110054592 de fecha 18 de septiembre de 2020, que las mismas dan cumplimiento al principio de transparencia pues la información fue proporcionada y facilitada a los peticionarios conforme lo solicitado por los peticionarios.

La ley 1712 de 2014 en su inciso 8 y 9 del artículo 3 define el principio de eficacia y calidad de la información en los siguientes términos:

*“...**Principio de eficacia.** El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.*

***Principio de la calidad de la información.** Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.” ...*



Las peticiones propuestas, conforme se avizora en la documental fueron resueltos por el IDPC de manera veraz, lo que conllevó a que lograra los resultados mínimos o fines del derecho de petición, es decir, obtener respuesta de fondo; lo que traduce en la no ilicitud sustancial, al respecto la Procuraduría General de la Nación en **Concepto No. 4098 de 17 de 2006** ha sentado su postura sobre el tema de la siguiente manera:

“...El límite de la potestad sancionadora, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se encuentra en la afectación o amenaza de afectación del servicio, de tal manera que, si esta situación no se produce, no hay lugar a responsabilidad disciplinaria. Por ello, para determinar dicha responsabilidad no es suficiente verificar la infracción del reglamento, sino que se hace necesario valorar la afectación del servicio o la función pública asignada (...).”

Ahora bien, respecto de las respuestas tardías, resulta importante traer a mención las decisiones disciplinarias, relacionadas con derecho de petición, entre estas: Radicación 161-5844 (IUS-E-2010-213485), Sala Disciplinaria aprobado acta No. 23 del 29 de mayo de 2014¹, donde se lee:

“[...]Ahora bien, de las peticiones analizadas, lo que sí advierte la Sala es que algunas de las respuestas suministradas por la entidad no fueron oportunas, pues en el caso de las

¹ Tomado de la radicación IUC: D – 2019 – 1267453IUS: E – 2019-116864, Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	<p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	 <p>Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 9 de 13</p>
	<p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>	
	<p>AUTO</p>	

solicitudes de copias, la entidad varias veces se pronunció después de los 10 días y en las de información después de 15, desconociendo de esta forma los términos legalmente establecidos para resolver las peticiones en sus distintas modalidades, sin embargo el solo incumplimiento de los términos no puede derivar responsabilidad disciplinaria en cabeza de los funcionarios implicados, pues lo cierto es que a pesar de la complejidad de las solicitudes, la entidad se pronunció y procuró atender cada uno de los asuntos requeridos, aun cuando en varias peticiones no estuviera claro cuál era su objeto o finalidad.

Pese a que el derecho de petición no puede ser limitado en cuanto al número de solicitudes que puede presentar el ciudadano, existe el deber de hacer uso razonable del mismo, pues como lo ha sostenido la Corte Constitucional¹⁵ el titular del derecho debe ejercerlo de forma que evite abuso en cuanto a la frecuencia, cantidad y contenido de los documentos solicitados.



Sin desconocer el derecho que le asiste a la señora MARGARITA TORRES, de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, y el deber de estas de dar respuesta oportuna y de fondo a las mismas, para la Sala fue excesiva la información y documentación solicitada al INSOR, por lo que claramente en algunos casos, las respuestas no podían ser atendidas dentro del término legal. Sin embargo, lo relevante es que la entidad se pronunció y entregó a la peticionaria la documentación e información solicitada como se logró establecer en el análisis de cada una de las peticiones y sus respuestas.

Es por esto que para la Sala la conducta de quienes tuvieron a su cargo la respuesta oportuna de las distintas peticiones presentadas por la quejosa no implicó un quebrantamiento sustancial de sus deberes, pues aun cuando en algunos casos no se atendió el término legal, la mora en dar respuesta resulta razonable dada la complejidad y cantidad de la documentación solicitada. Lo anterior fue evidenciado en el acta de reunión del Comité de Convivencia No. 004 del 18 de junio de 2010, en la que se recomienda a la señora MARGARITA aproximadamente 34 derechos de petición, sin contar con aquellos que formuló durante el 2008 y 2009, generando desgaste administrativo e incluso malestar en los funcionarios a cargo.

Entonces, comprobada la existencia de las respuestas a las distintas peticiones elevadas por la señora MARGARITA TORRES, la Sala Disciplinaria estima procedente confirmar la decisión de archivo adoptada por la primera instancia en providencia del 18 de noviembre de 2013, pues se demostró que la conducta de los disciplinados no constituye falta disciplinaria”

Radicación 161-6605 IUS-E-2011-356440 – IUC-D-2011-48-446182, Sala Disciplinaria aprobado acta No. 2 del 9 de febrero de 2017², donde se lee:

² Tomado de la radicación IUC: D – 2019 – 1267453 IUS: E – 2019-116864, Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 10 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

“Tenemos sobre el particular que el derecho de petición fue recibido en la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar el 29 de julio 2011, por lo que los diez días hábiles para dar respuesta transcurrieron entre el 1° y el 12 de agosto de esa anualidad, siendo así, que desde esta última fecha, hasta el 23 de agosto siguiente, cuando se dio la respuesta, pasaron 7 días hábiles. En este contexto, la censurada omisión se dio entre el día hábil siguiente al 12 de agosto de 2011, que era un viernes, es decir, entre el 15 y 19 de agosto de 2011 y el 22 y 23 de ese mismo mes y año, teniendo en cuenta los días hábiles.



Es de destacar que en la actuación no se esclareció, como correspondía, qué servidores intervinieron en el trámite del citado derecho de petición, es así que ha debido determinarse una vez ingresó el documento a la rectoría de la mencionada universidad, qué servidor lo radicó en dicha dependencia, a quien se asignó su trámite, qué gestiones se llevaron a cabo sobre el particular y, en qué fecha fue conocido por el rector Jesualdo Hernández Mielles, por tanto, las circunstancias temporales de la conducta atribuida al disciplinado no fueron concretamente establecidas.

Adicionalmente, para el esclarecimiento de los hechos era necesario determinar la forma en que estaban organizadas o distribuidas las tareas en la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar y, aunque efectivamente, como se dijo en el auto de cargos el rector tenía dentro de sus funciones, conforme al correspondiente manual de funciones velar por el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, lo cierto es que, como lo esbozó la defensa, la respuesta a los derechos de peticiones, es una tarea que corresponde más a los eslabones intermedios de la institución, de donde no resulta, como lo expuso la defensa, indiferente que la misma hubiera estado confiada a la Oficina Jurídica y no directamente en cabeza del Rector de la Universidad Popular del Cesar. ...

Por ello, teniendo en consideración que el principio de la ilicitud sustancial previsto en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 conlleva a que con relación al comportamiento cuestionado se evalúe no solo el desconocimiento formal del deber, sino que exige la demostración de su incidencia en la afectación o contrariedad de la función pública, en este caso se define que la conducta investigada no incidió en la afectación de la función pública y los principios que la gobiernan, en particular, el de eficacia, pues el término que excedió al legal previsto para dar respuesta a la petición y entregar los documentos que vinieran a lugar no fue de tal magnitud que hubieran afectado el derecho de petición de información y de acceso a documentos.

Fue así, que como se refirió en el recurso de apelación, el disciplinado cumplió con reconocer y ordenar el pago dispuesto a favor del aquí quejoso en la enunciada sentencia y para ello las dependencias involucradas adelantaron los trámites correspondientes.

Al respecto, es pertinente traer en referencia lo enunciado por el ex procurador General de Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, en la obra "Justicia disciplinaria", en cuanto a los temas de: "La ilicitud sustancial no es sinónimo de antijuridicidad formal" y "La ilicitud sustancial disciplinaria", bajo el siguiente contexto:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	<p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	 <p>Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 11 de 13</p>
	<p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>	
	<p>AUTO</p>	

La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Esta sencilla pero clara lectura, es la que debe corresponder a la filosofía del derecho disciplinario, más allá de las imprecisiones de tipo semántico o gramatical en que pudo haber incurrido el legislador. Debe advertirse que no se pretende de momento "reformular el texto que subyace a la norma disciplinaria. De lo que se trata entonces, es de encontrar una interpretación acorde con los principios y fines que deben orientar el derecho disciplinario dentro del marco del Estado Social de Derecho, como herramienta útil para encausar la conducta de quienes ejercen función pública.



Si el significado real del término antijuridicidad es el de ser contrario a derecho, debe entenderse que para estimarse cumplida la contrariedad de la conducta, ésta debe tener una razón de ser. El comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto, o cuando menos, extraño a los principios que rigen la función pública.

[...]

En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo en nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial"

Al realizar un estudio al caso en particular, los derechos de petición interpuestos con ORFEO: 20205110054592 y ORFEO: 20205110054422, a los que la entidad da respuesta, de manera tardía, no fue de tal magnitud, que hubieran afectado el derecho de petición de información. Por cuanto, no se configuró los requisitos para la responsabilidad disciplinaria respecto al resultado dañino o lesivo contra un tercero o un bien jurídico del estado, pues los derechos de petición presentados, fueron resueltos de fondo y no se evidencia que la respuesta tardía haya causado perjuicio alguno; por lo tanto, No afectó principios ni a la función pública, pues el IDPC cumplió con los principios de transparencia, eficacia y calidad de la información, al proporcionar y facilitar la información de fondo y de manera veraz, es decir, que tampoco se configuró una afectación a un deber sustancial, al no producirse una afectación al servicio, como se evidenció la petición fue resuelta por parte del IDPC.

En consecuencia, esta Oficina de Control Disciplinario Interno no puede formular cargos a la servidora disciplinada, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia, conforme al artículo 222 del Código General Disciplinario, que exige como presupuesto para la formulación de cargos la demostración objetiva de la falta y la existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. En este caso, no se encuentran satisfechos tales requisitos, motivo por el cual se impone disponer el archivo de la presente actuación.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 12 de 13
	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
	AUTO	

En tal sentido, este Despacho procederá a la aplicación del artículo 90 en concordancia con el artículo 224 de la Ley 1952 de 2019, que señala:

ARTÍCULO 90. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso.



ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal". (Subrayado fuera de texto)

Con fundamento en lo anterior y como quiera que no está claramente configurados los elementos en especial el de ilicitud, considera que no existe mérito para continuar con la presentes diligencias disciplinarias, y por ende procederá a disponer la terminación y archivo definitivo de las diligencias de conformidad con lo establecido por el artículo 90 de la ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, por cuanto la conducta no está claramente establecida en la Ley ni se evidencia configurado el elemento de la ilicitud sustancial.

En mérito de lo expuesto, **El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la terminación de la presente investigación y en consecuencia disponer el archivo definitivo del proceso tramitado bajo el **No. 035 de 2023**, a favor de la señora **MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 39.791.978, condición de **SUBDIRECTORA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN** del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la época de los hechos, por las razones expuestas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	<p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	 <p>Radicado: 20265300082423 Fecha: 21-04-2026 Pág. 13 de 13</p>
	<p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>	
	<p>AUTO</p>	

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente decisión al señor **MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 y 123 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que contra el presente acto procede el recurso de apelación, que se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 131, 134 y parágrafo 1 del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta decisión, comuníquese a la Personería Distrital de Bogotá, para los fines correspondientes, registrando la presente actuación en el aplicativo de reporte sistematizado de las Oficinas de Control Disciplinarios Interno para las entidades del Distrito Capital -OCDI-, en los términos enunciados en la Resolución 451 del 30 de noviembre de 2021, de la Personería de Bogotá. D.C.

ARTÍCULO QUINTO: **COMUNICAR** esta decisión a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216 del Código General Disciplinario y la Resolución No. 456 de 2017, expedida por el señor Procurador General de la Nación.

ARTÍCULO SEXTO: Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Documento 20265300082423 firmado electrónicamente por:	
JAIME RIVERA RODRÍGUEZ	Jefe de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Disciplinario Interno Fecha firma: 21-04-2026 11:59:12
Proyectó:	SHARON DANIELA AVILA ANDRADE - Contratista - Oficina de Control Disciplinario Interno
 <p>4e88dbbd9e95cdc09cc433877c1d5bea6c66663b8720670e6a5a3c0bf746b984 Codigo de Verificación CV: 89154</p>	